

# Ordena Tribunal Electoral reanudar evaluación para juzgadores en el PJJ

Denunciará penalmente en la FGR a quien ordenó frenarla // El amparo no aplica, subraya

FABIOLA MARTÍNEZ

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al comité de evaluación de ese poder reactivar sus trabajos de forma inmediata, en un lapso de 24 horas, para seleccionar a una parte de los candidatos a juzgadores; subrayó que ninguna autoridad puede interrumpir los preparativos de los comicios de junio.

En votación dividida, el pleno determinó denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Sergio Santamarina, juez que ordenó al comité detener su operación; la imputación sería por delitos contra la administración de la justicia.

Asimismo, el TEPJF presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal porque el mencionado juzgador de distrito con sede en Michoacán “inobservó el orden constitucional, ya que interfirió e invadió indebidamente en el ámbito de competencia” del TEPJF.

De esta manera, la sala superior determinó revocar los acuerdos del citado comité de evaluación del 7 y 9 de enero, por su afectación a los preparativos de la elección judicial.

Una vez más, al resolver asuntos de la más alta importancia para el TEPJF se exhibió la división entre sus integrantes; por un lado, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldaron el proyecto de la magistrada presidenta y ponente en el asunto, Mónica Soto, mientras Reyes Ro-



dríguez y Janine Otálora votaron en contra, al proponer el envío del expediente a la Corte, bajo el supuesto de que no hay claridad en las competencias de dos instancias del Poder Judicial.

Soto reiteró el argumento del año pasado, también en un caso relacionado con la reforma judicial, en el sentido de que el amparo no aplica en temas electorales, pero sobre todo que el TEPJF es máxima instancia en la materia y sus decisiones son definitivas e inapelables.

Por tanto, consideró que el juez incurrió en un exceso y se extralimitó en sus funciones y competencias.

“No somos, incluso, jueces del mismo nivel; esta sala superior es última instancia y me parece que el rechazar una de sus sentencias evidentemente es una actuación de alta gravedad”, sostuvo.

A su vez, De la Mata explicó ante la prensa la médula del fallo de este miércoles, al subrayar que lo único que está haciendo el TEPJF es defender su competencia.

“Así como nosotros no concede-

mos divorcios, tampoco resolvemos juicios penales y no declaramos temas que tengan que ver con contratos laborales ordinarios, los jueces de amparo no tienen por qué meterse a la competencia electoral”, advirtió.

De lo contrario, subrayó, hay infracción legal y constitucional, “y todos los jueces de amparo lo saben. Uno de ellos tomó una decisión que a mi juicio es inconstitucional e ilegal; una determinación que quiero pensar es jurídica y no política, y lo que corresponde es revocarla. ¿Por qué?, porque somos la máxima autoridad en temas electorales; por eso simplemente ya quedó revocada. ¡Ojo!, pero no revocamos el amparo, eso es otra cuestión, revocamos específicamente la determinación del Comité”.

Soto, De la Mata y Fuentes coincidieron en que la resolución de la sala superior no mete en conflicto al TEPJF con la Corte —al advertir quejas y denuncias incluso penales contra uno de sus jueces— ni se trata de una pugna personal; al con-

▲ El amparo no aplica en temas electorales, subrayó la presidenta del TEPJF, Mónica Soto. En la imagen, sesión pública de agosto pasado. Foto Cristina Rodríguez

trario, manifestaron su confianza en que el comité acate la sentencia.

Sin embargo, no puntualizó lo que haría el tribunal en caso de que el comité ignore la determinación, como ocurrió en 2023 cuando el Poder Legislativo bateó una orden para incorporar en la Permanente a un diputado de MC.

Soto no compartió en absoluto el criterio de sus colegas Rodríguez y Otálora y sostuvo que la Constitución dice expresamente que lo electoral compete al TEPJF, salvo la excepción establecida en el artículo 105 constitucional, “que no es el caso”.

Antes, durante la sesión, Rodríguez destacó los antecedentes del caso, en especial la solicitud inhibitoria y el incidente de suspensión

relacionado con un amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial.

Expuso que en lugar de entrar al fondo del asunto —como al final ocurrió— se debió tomar en cuenta “el punto de toque entre ambas competencias. Sí, estas son cuestiones electorales, pero la reforma judicial no es estrictamente y solamente comicial, y el derecho electoral no es una isla dentro de nuestro sistema constitucional y legal”, expuso.

Los magistrados que hacen mayoría respondieron que el año pasado el TEPJF ya resolvió dos asuntos respecto a la imposibilidad de suspender la elección judicial, y la Corte ha señalado que al estar implicada la materia electoral no admiten la suspensión del procedimiento.

# Tribunal: comité del PJ debe reanudar proceso

**Sala Superior resuelve que los actos electorales no pueden frenarse y ordena denunciar ante la FGR a juez que suspendió las actividades**



**OTILIA CARVAJAL**  
—nacion@eluniversal.com.mx

Por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de selección de aspirantes a cargos judiciales, a más tardar en 24 horas a partir de la notificación, al sostener que no pueden frenarse los actos electorales.

El proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto también determina presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez de Distrito de Michoacán que dictó la suspensión.

Además, el pleno acordó hacer un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que también resuelvan a la brevedad los juicios que están en su competencia.

“Es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo de, entre otras autoridades, los comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, en tanto exista norma que constitucionalmente le impone dicha atribución y mandato, como en el caso ocurre”, sostiene la resolución.

Además, señala que el juez Primero de Distrito de Michoacán actuó fuera de sus facultades constitucionales, ya que “interfirió e invadió, indebidamente, en el ámbito de competencia que es exclusivo de esta autoridad constitucional, al adjudicarse atribuciones de las que carece, con la intención de evitar que este órgano jurisdiccional ejerza jurisdicción que se encuentran en su ámbito de atribuciones”.

La magistrada apuntó que no es un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la resolución del

**MÓNICA SOTO**  
Magistrada presidenta del TEPJF

**“Son resoluciones jurídicas, no personales. No hay ningún enfrentamiento ni confrontación, mucho menos con la Suprema Corte de Justicia ni con su presidenta”**

juez, ya que eso le corresponde a otras autoridades, aunque señala que los actos cometidos por el comité sí pertenecen exclusivamente al ámbito electoral.

El comité evaluador suspendió el proceso de selección tras una resolución de un juez de amparo, determinación que fue confirmada por la Corte el 13 de enero.

En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora expuso que tendrían que remitir los asuntos a la Suprema Corte para que resuelva una cuestión competencial con la Sala Superior.

“Estamos, y ya fue dicho en efecto, en un momento fundamental en la historia jurídico-electoral de México en el que el papel de esta Sala Superior es justamente ir despegando los cuestionamientos y los casos no previstos que se plantean por primera ocasión en esta primera elección extraordinaria de 2025, y que vayan trazando un camino para la del año 2027 y subsecuentes”, sostuvo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expresó su desacuerdo con el proyecto, al considerar que el papel de la Sala Superior es minimizar la confrontación entre tribunales y abonar a la certeza de los aspirantes, así como la estabilidad del sistema legal.

También se separó de la vista a la Fiscalía General de la República, al señalar que esta medida es desproporcionada.

El magistrado Felipe Fuentes subrayó que el comité del Poder Judicial debe continuar con sus obligaciones constitucionales y legales, consistentes en el desarrollo y selección de los aspirantes a cargos judiciales.

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata apuntó que la resolución del juzgado “constituye una vulneración directa a la Constitución por la sencilla razón de que, la elección judicial está prevista constitucionalmente y no admite la suspensión en ninguna de sus etapas, aun si tales actos se explican como consecuencia de una medida cautelar de un juez de amparo, pues tal medida resulta de un exceso de sus atribuciones y una invasión de competencias que altera el orden constitucional y por tanto, es nula de pleno derecho”.

**No hay enfrentamientos en el Poder Judicial, afirma magistrada**

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, afirmó que no hay enfrentamiento en el Poder Judicial ni la Corte, sino que las determinaciones han sido apegadas a derecho, tras ordenar la reanudación de actividades del comité evaluador de dicho poder.

En conferencia de prensa con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, defendió la decisión de imponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el juez de Distrito que suspendió las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, al asegurar que la resolución es apegada a la Constitución.

“Son resoluciones jurídicas, no personales. No hay ningún enfrentamiento ni confrontación, mucho menos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni con su presidenta”, afirmó. ●

**EL DATO**

El Comité de Evaluación del Poder Judicial había suspendido la selección de aspirantes tras una resolución de un juez de amparo, confirmada por la Corte el 13 de enero.